

43.^a REUNION — Continuación de la 29.^a SESION ORDINARIA

SEPTIEMBRE 22 DE 1933

Presidencia del doctor JULIO A. ROCA,

Vicepresidente de la Nación

Senadores presentes: Arancibia Rodríguez Alberto, Arenas Marió, Bravo Mario, Bruchmann Carlos A., Campos Rudecindo S., Castillo Ramón S., Ceballos Mariano P., Ceballos Reyes Raúl, Correa Francisco E., Galíndez Francisco R., Matienzo José Nicolás, Montenegro Pío, Palacios Alfredo L., Sánchez Sorondo Matías G., Santamarina Antonio, Serrey Carlos, Vera Cruz, Vera Ocampo Horacio, Vidal Juan R.

Senadores ausentes, con licencia: Lubary Juan José, Villafañe Benjamín.

Senadores ausentes, con aviso: Cantoni Aldo, Eguiguren Atanasio, Laurencena Eduardo, López Peña Lucio, Patrón Costas Robustiano, Porto Carlos R., Rothe Guillermo, Torre Lisandro de la.

SUMARIO

I.—Asuntos entrados:

- I.—Comunicación del Poder Ejecutivo. Mensaje solicitando acuerdo para designar juez federal de Paraná.
- II.—Despachos de comisiones.
- III.—Peticiones particulares.
- IV.—Proyecto de ley de los senadores Ceballos y Sánchez Sorondo acordando pensión a las señoritas Clotilde, Matilde y Juana Lartigau. A la Comisión de Peticiones y Poderes.
- V.—Proyecto de ley de los senadores Sánchez Sorondo y Santamarina acordando pensión a la señorita María Luisa Kier. A la Comisión de Peticiones y Poderes.

- 2.—Proyecto de ley del senador Castillo sobre asistencia social y patronato de menores. A la Comisión de Códigos.
- 3.—Moción de preferencia del senador Vera para tratar el despacho de la Comisión de Obras Públicas sobre un ramal ferroviario a Pie de Pájaro, Mendoza. Se aprueba.
- 4.—El senador Castillo es designado delegado a la Primera Conferencia Nacional sobre Infancia Abandonada y Delincuente.
- 5.—Moción de preferencia del senador Ceballos para tratar en el orden de las preferencias, todos los despachos de las comisiones de Peticiones y Poderes y de Guerra y Marina. Se aprueba.
- 6.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Códigos en el proyecto, en revisión, sobre reforma de los artículos 154 a 160 del Código de Comercio. Se aprueba, con modificaciones.
- 7.—Consideración del proyecto venido en segunda revisión, relativo a la modificación del artículo

855 del Código de Comercio, referente a la prescripción de acciones derivadas del contrato de transporte. El Senado insiste en su sanción anterior. Es ley.

- 8.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación, referente al cierre de los establecimientos comerciales entre las 20 y las 6 horas. Se aprueba, con modificaciones.
- 9.—Consideración del despacho de la Comisión de Agricultura en el proyecto del senador Sánchez Sorondo creando la Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate.
- 10.—Cuarto intermedio.

—En Buenos Aires, a los veintidós días del mes de Septiembre de 1933, siendo la hora 16 y 10 minutos, dice el:

Sr. Presidente. — Continúa la sesión.
Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

1

ASUNTOS ENTRADOS

I

Comunicación del Poder Ejecutivo

Mensaje solicitando acuerdo para designar juez federal en Paraná

Buenos Aires, 21 de Septiembre de 1933.

Al Honorable Senado de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente a fin de designar juez federal de Paraná, en sustitución del doctor Prudencio M. Clariá, que falleció, al doctor Eduardo Garbino Guerra, actual procurador fiscal federal de la misma sección.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

AGUSTÍN P. JUSTO.
Manuel de Iriondo.

—A la Comisión de Acuerdos.

II

Despachos de comisiones

OBRAS PÚBLICAS:

En el proyecto de ley, en revisión, sobre construcción de un ramal ferroviario a Pie de Palo, Mendoza.

—En el proyecto de ley de los senadores Galíndez,

Santamarina, Serrey, Castillo, Arancibia Rodríguez, Bruchmann, Vera Ocampo, Vidal y Rothe, acordando la suma de 250.000 pesos moneda nacional, para la construcción del edificio propio de la Liga Nacional de Empleados Públicos.

GUERRA Y MARINA:

En las siguientes solicitudes de pensión: Sara Viejobueno de Bahero, Francisca C. de Esperón, Bernardo Gatti y María Elena Pérez Wright.

—A la orden del día.

III

Peticiónes particulares

Los magistrados, funcionarios y empleados de la Justicia Ordinaria y Federal de la Capital, de las jurisdicciones Civil, Comercial y Criminal, adhiérense al anteproyecto de la ley de escalafón judicial elevado por la Asociación de Secretarios de la Justicia Ordinaria y Federal de la Capital. (*A sus antecedentes*).

—La Bolsa de Cereales de Buenos Aires solicita la sanción del proyecto sancionado por la Cámara de Diputados en el proyecto modificando el artículo 855 del Código de Comercio. (*A sus antecedentes*).

—La Asociación de Secretarios de la Justicia Ordinaria y Federal de la Capital eleva el anteproyecto de ley de escalafón judicial. (*A la Comisión de Justicia e Instrucción Pública*).

—La Unión Patronal de Lecherías y Anexos y el Centro de Almaceneros de la Capital adhiérense al petitorio de la Federación Comercio Minorista Alimenticio de la Capital. (*A sus antecedentes*).

—El Centro Propietarios de Lecherías, Cafés y Anexos solicita derogación de los impuestos a los réditos y transacciones. (*A sus antecedentes*).

—La Asociación Comercial e Industrial de Merlo, el Centro de Comerciantes de la Capital y la Unión Comercial e Industrial de Pehuajó solicitan la derogación de los impuestos a los réditos y transacciones. (*A sus antecedentes*).

—Ester P. Almandos solicita prórroga de pensión civil. (*A la Comisión de Peticiones y Poderes*).

—Felisa Jesús A. de Aguirre solicita prórroga de pensión civil. (*A la misma*).

IV

Proyecto de los senadores Ceballos y Sánchez Sorondo, acordando pensión a las señoritas Clotilde, Matilde y Juana Lartigau.

—Se lee:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Acuérdase a las señoritas Clotilde, Matilde y Juana Lartigau la pensión mensual de trescientos pesos moneda nacional.

despachos de la Comisión de Negocios Constitucionales, sobre pacto de la Liga de las Naciones y varias convenciones de Wáshington: el martes, 26, el despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales referente a la nota del juez Nicholson, sobre desafuero al señor senador de la Torre y el miércoles, 27, ha sido fijado para considerar el despacho de la Comisión de Agricultura en el proyecto de elevadores de granos, con la presencia del señor ministro de agricultura.

Sr. Palacios. — Yo creo, señor presidente, que deben dejarse sin efecto los días señalados para esas preferencias, y esos asuntos agregarse a la lista que acaba de leer el señor secretario.

Sr. Bravo. — El inconveniente que encuentro en la moción que ha hecho mi compañero y colega, consiste en que para esos dos asuntos se ha requerido la presencia de los ministros.

Sr. Palacios. — Se les avisará oportunamente. No podemos establecer un orden de preferencias hasta el lunes porque se trata de 4, 5 ó 6 asuntos que no van a ser considerados en un solo día; en cambio, todo se puede solucionar incorporando las nuevas preferencias en el orden y a continuación de las ya establecidas.

Sr. Presidente. — Se van a votar por su orden.

Sr. Ceballos. — ¿Mañana sábado hay sesión?

Sr. Presidente. — La moción del señor senador por Buenos Aires fué aprobada fijando sesiones diarias, sin exceptuar los sábados.

Sr. Ceballos. — Yo pido entonces mi preferencia para la sesión de mañana.

Sr. Bravo. — La moción del señor senador por Buenos Aires, doctor Sánchez Sorondo, en una sesión anterior, fué para que el Senado celebre sesiones diarias. La Cámara debe reunirse, entonces, el sábado y el domingo.

Sr. Serrey. — Para sesionar el domingo se requeriría una votación especial. Las sesiones diarias comprenden los días hábiles.

Sr. Bravo. — El sábado después de medio día, es sábado inglés, sancionado por ley, y por esa razón a moción del señor senador por Córdoba se suspendieron las sesiones de los sábados.

Sr. Serrey. — Pero el Senado puede resolver sesionar el sábado.

Sr. Bravo. — ¿Y por qué razón se van a respetar las fiestas religiosas y no las fiestas laicas, como lo es el sábado inglés?

Sr. Ceballos. — Los despachos que he señalado en mi preferencia distraerán la atención del Senado a lo sumo una hora. De manera que yo mantengo mi moción para que se consideren los despachos de la Comisión de Guerra y Marina en la sesión del lunes.

Sr. Sánchez Sorondo. — Pero será después del despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales.

Sr. Ceballos. — ¿Que se refiere a qué?

Sr. Sánchez Sorondo. — A la aprobación del pacto de la Liga de las Naciones.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción del señor senador por Córdoba de tratar los despachos de las comisiones de Peticiones y Poderes y de Guerra y Marina en la sesión del lunes próximo, después de considerarse el dictamen de la Comisión de Negocios Constitucionales, sobre la aprobación del pacto de la Liga de las Naciones.

Sr. Sánchez Sorondo. — Me parece conveniente hacer la aclaración de que si no hubiera número para esa sesión, se considerará en la primera que celebre la Cámara.

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción formulada por el señor senador por la Capital de dejar sin efecto la fijación de día para tratar asuntos.

Sr. Palacios. — Retiro mi moción, señor presidente, en virtud de lo resuelto por el Senado.

Sr. Presidente. — Muy bien, señor senador.

6

REFORMAS AL CODIGO DE COMERCIO

Sr. Presidente. — A la orden del día. Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Códigos sobre reformas al Código de Comercio.

Sr. Ceballos. — Pido la palabra.

Empezaré pidiendo disculpas al Honorable Senado por los minutos que voy a tomarle para pronunciar las pocas palabras que debo decir, con motivo de este proyecto de modificaciones a los artículos del Código de Comercio.

No me equivocaría si dijese que este asunto tan brillante, inteligente e interesantemente planteado por los señores senadores está agotado y que debiera el Honorable Senado entrar a votarlo porque todos nosotros tenemos opinión hecha a ciencia y conciencia.

Sin embargo, el hecho de disentir con mis compañeros de sector, me obliga a dar las razones que tengo para violentar el propósito que me había trazado de votar en silencio el despacho de la minoría de la Comisión, salvo la parte que se refiere a la retroactividad de

la ley, es decir, en la parte que comprende a los empleados y obreros dejados sin trabajo desde el 1º de Agosto de 1932.

Hace muchos años, debo referirme al año 1916, a raíz del triunfo radical en la República, que fué también un triunfo aplastante de este partido en mi provincia, discurríamos los hombres de entonces sobre las razones de orden político o de orden social que pudieran haber influido en el espíritu público, para dar un veredicto popular sugestivo y aplastante.

Pocos atinaban a encontrar la explicación. Sus hombres, prestigiosos en la provincia y aun en la Nación; sus sistemas administrativos podían ser ejemplos, aún al sentimiento más exigente; los procedimientos de todo orden, encuadrados en la línea inflexible de la honestidad, en las prácticas democráticas y administrativas. A pesar de todo esto, los efectos se sintieron como en carne propia. Debíamos llegar, señor presidente, a la conclusión de que nos había pasado lo que el señor senador Bravo relataba el otro día, con esa aticidad que lo caracteriza: éramos los viajeros que habíamos llegado tarde a la estación y no nos quedaba más recurso que, o convencernos de la realidad de los hechos y poner remedio, o protestar contra la empresa ferroviaria.

Y bien, señor presidente. Los hombres jóvenes de entonces, con Rafael Núñez a la cabeza, romántico y soñador, de una vida nueva, de un espíritu amplio y generoso para las orientaciones democráticas, resolvimos sacar de la tradición y del pasado la experiencia y la enseñanza de los hechos y echar las bases de un partido político moderno, amplio, liberal y democrático. Y así empezó la lucha, señor presidente, y así el pueblo de Córdoba y el pueblo de la República contempló el espectáculo aleccionador, insospechado para muchos de los que sufrieron con nosotros las derrotas del año 1916, que nos habían pregonado el gobierno radical por 30 años. Presenció, digo, una rectificación a aquella justa democrática y Rafael Núñez, ante el asombro general del país y ante el regocijo de los hombres de Córdoba, llegaba a la primera magistratura de la provincia en el año 1919; el primer acto de su gobierno fué realizar en él, lo que había sido una promesa como candidato y lo que era una justa y legítima aspiración de aquel pueblo. Preocupóse con interés de buscar las soluciones a los problemas de carácter económico y social que agitaban y preocupaban la vida de aquella provincia; y así podemos decir, con satisfacción, que todas las leyes de carácter económico y social vigentes

en Córdoba son obra nuestra, y que muchas de ellas, todavía no han podido ser incorporadas a las leyes generales de la Nación.

Tenemos, así, hace mucho tiempo la ley de las ocho horas, la ley de la silla, el cierre a las 20 horas, las leyes que protegen al anciano y al inválido por enfermedad o por accidente, los gimnasios populares, las bibliotecas populares, los lavaderos y baños públicos, para arrancar a los niños y a los pobres de la vagancia, para levantarlos del nivel moral y material en que se encuentran, y para hacerlos ciudadanos útiles y dignos de la sociedad en que actúan.

Los otros días, cuando el senador por la Capital, doctor Palacios, fundaba tan elocuentemente su proyecto de protección a la madre obrera, tuve que hacer un enorme esfuerzo para no interrumpir su elocuente discurso, pues deseaba decirle al señor senador que en Córdoba hace mucho tiempo que está vigente la ley de protección a la madre, antes, durante y después del alumbramiento.

Y bien, señor presidente; ésto no fué una improvisación de los hombres de Córdoba, sino el resultado del estudio y meditación de la época en que se vivía.

La industria moderna, con sus cambios y evoluciones, ha traído modificaciones en el derecho común, que deben traducirse en leyes que forzosamente modifican las viejas reglas del derecho primitivo.

Es una imposición de los tiempos, que debemos reglar y orientar con cordura y con reflexión, pero con estricta justicia, justicia jurídica y social, que proteja todos los derechos y que ampare y contemple todas las inquietudes y que no se detenga en términos más o menos rígidos, que hicieron su época, que cimentaron las bases de grandes y nobles instituciones, pero que deben ceder y amoldarse a las exigencias de una nueva vida.

Felizmente, señor presidente, los despachos en discusión coinciden, en casi todas sus partes, y así la mayoría y la minoría de la Comisión, están de acuerdo en que es necesario igualar la situación del obrero con la de los empleados de las casas de comercio; que es necesario la indemnización por despido cuando no ha habido aviso previo o cuando ha habido aviso; que es necesaria la indemnización para el enfermo sin culpa.

Y el señor miembro informante de la mayoría de la Comisión, con la autoridad y con la erudición que nadie puede discutir, ha llegado a avanzar aún más y ha dicho: hago votos por

que llegue la hora en que podamos incorporar a la legislación de forma y de fondo esta aspiración colectiva y justiciera. En una palabra, ha hecho la cuestión sobre la constitucionalidad de la ley. Esta misma cuestión y estos mismos argumentos, señor presidente, se hicieron cuando se discutió en la Cámara de Diputados la ley de alquileres.

Se habló de la inviolabilidad de la propiedad, de la validez del contrato hecho por las partes, de la falta de eficacia y de la falta de facultades de los legisladores del Congreso argentino para llegar hasta donde las leyes fundamentales de la Nación garantizan a los propietarios. La ley de alquileres se sancionó; la inquietud y la zozobra que agitaba entonces a una gran parte del pueblo argentino, se acalló.

El Congreso dictó una ley que tuvo gran consenso público; el problema de la locación en los centros urbanos se conjuró. Y yo no sé si fué en mérito a la ley o por la voluntad de los propietarios, lo cierto es que el problema angustioso e inquietante dejó de preocupar la vida de la Nación.

Tampoco sé si la Suprema Corte declaró constitucional o inconstitucional la ley; lo cierto es que el Congreso argentino, interpretando en esos momentos las justas aspiraciones de la población, dictó esa ley. Y ahora el caso es el mismo.

No nos preocupemos demasiado de los conceptos rígidos de los códigos; no nos asustemos nosotros mismos, diciendo que es necesario hacer una revisión del código en vigencia, porque eso significa poner ante nuestros ojos una motaña, que alarma, que preocupa y que hace que la gente se resista a abordar el estudio y solución de estos problemas de tanta magnitud; pero sí sírvanos, señor presidente, para tenerlos en cuenta — y esto va principalmente para los juristas y para los estudiosos de dentro y fuera del Congreso.

Si es necesario modificar las leyes fundamentales de la Nación, hagámoslo; de lo contrario nos exponemos a estas modificaciones parciales, que si no son siempre lo perfectas que todos deseamos son, sí, imposiciones del momento, exigencias de la época que estamos obligados, por nuestro mandato y por la representación que ejercemos, a resolver, salvo que pongamos oídos sordos a las legítimas aspiraciones de la vida colectiva del país.

Nada más, señor presidente.

Sr. Matienzo. — Pido la palabra.

Voy a hacer lo posible, señor presidente, para ocupar por muy breve tiempo, la atención del

Senado. Y me ajustaré al reglamento, que establece que en la discusión primera general de los asuntos, no se habla sino de lo general, y se dejan los detalles para la discusión en particular.

Cuando se trate de la discusión en particular, será posible hablar acerca de cada una de las medidas especiales que se proponen en cada uno de los artículos.

Cuando el señor miembro informante de la Comisión hablaba de la inconstitucionalidad de este proyecto, me alarmé, señor presidente.

He recorrido desde el artículo 1º hasta el 110 de la Constitución, para ver si alguno impide la protección legal de los dependientes de comercio, y no he encontrado, señor presidente, ninguna disposición que se oponga a esa protección legal. Si hubiera alguna disposición aislada del proyecto que contrariase algún artículo de la Constitución, sería materia de la discusión en particular, y entonces yo tendría el mayor gusto en acompañar a los señores senadores de la mayoría de la Comisión, siempre que demuestren que tal artículo del proyecto es contrario a tal artículo de la Constitución. Pero la idea fundamental no se opone, de manera que en la discusión general no se puede hablar de eso.

Sr. Arancibia Rodríguez. — ¿Me permite, señor senador? Para una aclaración. Yo no he impugnado más que un solo artículo del proyecto como inconstitucional.

Sr. Matienzo. — Yo no lo he interrumpido al señor senador...

Lejos, señor presidente, de que se oponga la Constitución a la protección de los débiles contra los fuertes, vemos en el preámbulo de la Constitución autorizada esa protección, cuando dice que uno de los objetos fundamentales de la Constitución, es «afianzar la justicia, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el territorio argentino».

¿Es o no es afianzar la justicia intervenir entre el fuerte y el débil para hacer respetar los derechos del débil? ¿Es o no es promover el bienestar general, impedir que se susciten estos conflictos que pueden alterar la paz de la sociedad argentina, más o menos profundamente según la entidad que los promueva? ¿Es o no es asegurar los beneficios de la libertad, garantizar que la voluntad del patrón no será predominante en absoluto sobre la voluntad del dependiente o del empleado?

En Estados Unidos, señor presidente, por sentencia de la Corte Suprema, se ha llegado a

establecer que la libertad está interesada en una cláusula del contrato que establezca la prohibición del obrero o del dependiente de retirarse del trabajo, porque se ha dicho allí la enmienda 13 de la Constitución, que abolió la servidumbre involuntaria, después de la guerra de secesión, importa prohibir todo contrato que someta a un ser humano bajo la dependencia absoluta de otro ser humano, de manera que la terminación del contrato de locación de servicios, como lo llamamos nosotros, o contrato entre *master and servant*, como dicen los ingleses y los norteamericanos, puede ser hecha en cualquier momento, señor presidente.

Una de las objeciones que he oído en la discusión en general, es la que esto afecta a la legislación del país contenida en los códigos, y alguno de los señores senadores ha temido, al parecer, que esa alteración de los códigos, no fuera lo más conveniente.

Y bien, señor presidente. La existencia de códigos es un accidente en la legislación constitucional argentina: Alberdi, que propuso la Constitución, no propuso los códigos, dijo, sencillamente, que el Congreso legislará en materia civil, comercial y penal. Fue el Congreso Constituyente, a proposición de algún diputado más abogado que constitucionalista, el que estableció la frase, «el Congreso dictará los códigos Civil, Penal, Comercial y de Minería». Pero Alberdi, comentando esta cláusula en su *Sistema Rentístico y Económico*, dijo que esta facultad del Congreso de dictar los códigos, no es una obligación de dar forma de código a toda la legislación civil, comercial y penal. De modo que el Congreso puede hacer lo que le parezca; dictar un código comprendiendo en un solo tomo toda la legislación civil, o puede reglamentar esas materias por leyes sueltas.

Alberdi era partidario de las leyes sueltas, porque decía que así las reformas son más fáciles; y se puede modificar una ley suelta cuando sale mala, pero es muy difícil modificar totalmente un código.

La experiencia ha demostrado, señor presidente, que Alberdi tenía razón; estamos reformando a cada rato los códigos fundamentales, el civil, el penal, el comercial, el de minería, por leyes sueltas.

Los códigos envejecen mucho más pronto que las leyes sueltas. Todo envejece en el mundo, las instituciones, las personas, aun cuando no envejecen en proporción al número de años. Hay personas que son muy jóvenes del punto de vista del número de años que cuentan, pero son muy viejas por el espíritu que contienen y a la inversa, hay personas que son, en apariencia, muy

viejas físicamente, porque tienen muchos años de vida, pero que son muy jóvenes por el espíritu que encierran.

Yo deseo, señor presidente, que esta pequeña diferencia de cinco años que establece la Constitución entre la capacidad exigida para ser diputado, 25 años, y la capacidad exigida para ser senador, 30 años, no nos conduzca a establecer una enorme distancia entre la Cámara que se llama *joven* y la que se llama de los *ancianos*. Quisiera que, aunque tuviéramos más años, fuéramos tan jóvenes de espíritu, como los diputados.

Cuando quiero averiguar la edad de las personas, no pregunto cuántos años cuentan, sino qué ideas tienen, porque calculo la juventud de las personas por la calidad de sus ideas y no por el número de años que su partida de nacimiento pueda establecer.

Se asustaban, también, algunos señores senadores de la posibilidad de que hubiera alguna diferencia entre la legislación civil y la legislación de comercio en esta materia de los dependientes. Me parece que era ese el argumento fundamental que hacía el señor senador por Catamarca, que los dependientes de comercio iban a quedar mejor protegidos que los dependientes del campo, de la industria, de la albañilería...

Sr. Castillo. — Me he referido a los obreros, señor senador.

Sr. Matienzo. — ¿Eso de qué depende, señor presidente? Ese es un argumento en contra de la división de la legislación en códigos, en un código civil y otro de comercio. ¿Por qué este proyecto, en lugar de referirse tan sólo al Código de Comercio, no ha tomado la solución conveniente, la solución inglesa y norteamericana, para legislar sobre locación de servicios, sobre *master and servant*, como dicen los ingleses? Entonces, la locación de servicios no sería desigual; para los comerciantes de un modo, y para los no comerciantes de otro modo. Yo propondría al señor senador por Catamarca que, como una consecuencia de su objeción, generalizase esta ley para todos los casos de locación de servicios.

También se habla de la posibilidad de que hubiera una protección excesiva para los pobres dependientes, pero los que eso piensan no se preocupan si hay protección excesiva para los grandes capitalistas, si hay protección excesiva para el azúcar, para el vino, para los tejidos, etcétera; no se preocupan tampoco de saber si esa protección a las grandes industrias, a los capitalistas industriales, perjudica o no al pueblo consumidor, encareciendo los artículos; pero sí

se preocupan de saber que la protección a los empleados puede encarecer el consumo.

Por mi parte, señor presidente, me parece que un Congreso que acaba de votar con rapidez la prórroga de los contratos hipotecarios sin consultar a los capitalistas, sencillamente para favorecer al pequeño gremio de deudores (*rises*), bien puede dictar esta otra ley que protege de un modo mucho más justo a la gran masa de obreros y dependientes que contribuyen con su acción y trabajo a la creación de la riqueza nacional.

Me parece, señor presidente, que estas razones bastarían para decidir mi voto a favor de cualquiera de los dos proyectos, pero como el proyecto que viene de la Cámara de Diputados tiene apariencia de mayor juventud que el otro proyecto que ha informado el señor senador por San Luis, yo me inclino donde está la mayor juventud, donde está el progreso. No quiero aparecer retardatario; quiero colocarme — esta es la primera vez — del lado que se coloca el señor senador por Córdoba.

Sr. Ceballos. — Es muy honroso para mí, señor senador.

Sr. Matienzo. — Y hago votos, señor presidente, por que el Senado abandone toda tendencia hacia las ideas vetustas, abandone la resignación con que acepta que se le llame la Cámara de los viejos y se preocupe en competir, en juventud, con la otra Cámara.

Nada más.

Varios señores senadores. — ¡Muy bien! ¡Muy bien!

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Se va a votar, en general, el despacho de la mayoría de la Comisión.

Sr. Bravo. — Pediría que la votación fuera nominal.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Habiendo asentimiento, así se hará.

—Se procede a la votación nominal con el siguiente resultado:

—Votan por la afirmativa, los señores senadores: Serrey, Arenas, Sánchez Sorondo, Santamarina, Castillo, Galíndez, Campos, Vidal, Vera y Arancibia Rodríguez.

—Votan por la negativa, los señores senadores: Ceballos, Correa, Vera Ocampo, Bruchmann, Palacios, Montenegro, Ceballos Reyes, Matienzo y Bravo.

Sr. Secretario (Figueroa). — Afirmativa de 10 votos contra 9.

Sr. Presidente. — En discusión en particular.

—Se lee:

Artículo 1º — Modifícanse los artículos 154, 155, 156, 157, 158, 159 y 160 del Código de Comercio, en la siguiente forma:

Artículo 154. — Los factores, dependientes y todos los demás empleados auxiliares, así como los obreros contratados por un comerciante para realizar tareas que conciernen a su negocio, son responsables, ante sus principales, de cualquier daño que causen a sus intereses por dolo, culpa o negligencia.

Sr. Castillo. — Pido la palabra.

Consecuente con lo que expuse cuando se consideró en general este asunto, propongo que este artículo comprenda, exclusivamente, a los factores, dependientes y demás empleados de comercio; excluyo de este modo a los empleados de los no comerciantes y a los obreros que obligan solamente su mano de obra, obreros de los comerciantes y no comerciantes.

Para el caso que se rechazara este artículo proyectado por la Comisión propongo el siguiente: «Artículo 154: Los factores, dependientes y demás empleados de los comerciantes, son responsables de cualquier daño que causen a su principal, por dolo, culpa o negligencia» Nada más.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Pido la palabra

La Comisión no acepta la supresión que propone el señor senador por Catamarca y no vá a reproducir, por considerarlo absolutamente innecesario, los fundamentos extensos que oportunamente expuso para mantener la inclusión de los obreros en este beneficio del Código de Comercio. Me resta solamente repetir que esta inclusión significa uno de los mejores beneficios que esta ley reportará a un número considerable de trabajadores asalariados y que es lo que más prestigio le da.

Además, las razones de justicia y equidad en que la Comisión se ha fundado y que se han dado también en la Cámara de Diputados desde 1915 hasta la fecha, en que se viene proponiendo la solución que el Senado tiene ahora a consideración.

Sr. Correa. — Me parece que toda discusión sobre este artículo es ociosa, porque de acuerdo al derecho común todos responden del dolo y la culpa, sean empleados u obreros, o no lo sean.

Sr. Arancibia Rodríguez. — No es eso, señor senador; se trata de equiparar a los obreros con

los empleados de comercio para acordarles los beneficios que tienen ellos.

Sr. Correa. — Es que este artículo 154 no confiere beneficios sino responsabilidades

Sr. Arancibia Rodríguez. — En ese artículo se determina a qué personas comprende la ley comercial y sus responsabilidades. Los beneficios vienen en los artículos siguientes.

Sr. Correa. — Lo que sostengo es que es ocioso discutir si se comprende a los empleados solamente, o a los empleados y obreros, en la definición sobre responsabilidad en el dolo y la culpa, desde que ya están alcanzados por el derecho común.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Se agrega a los obreros en este artículo para mantener la unidad de la ley, comprendiéndolos en las cargas y responsabilidades.

Sr. Correa. — Eso es muy bizantino.

Sr. Presidente. — La Presidencia entiende que para facilitar la sanción de esta ley debe votarse artículo por artículo del Código de Comercio, que haya sido motivo de modificación en el despacho de la Comisión de Códigos.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Votándose primero el despacho de la mayoría.

Sr. Presidente. — Naturalmente, señor senador. Se va a votar el despacho de la mayoría de la Comisión de Códigos sobre el artículo 154 del Código de Comercio, que ya se ha leído.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

Artículo 155. — Los accidentes y las enfermedades inculpables que impidieren el ejercicio de sus funciones a los factores, dependientes, empleados y obreros del comercio, con tres meses como mínimo de antigüedad en el cargo, que trabajen a sueldo, jornal, comisión u otro modo de remuneración, sea en dinero o en especie, alimentos o uso de habitación, no les privarán del derecho de percibir íntegramente dichas retribuciones hasta tres meses de interrupción, si tienen una antigüedad en el servicio que no exceda de diez años, y hasta seis meses, si tienen una antigüedad mayor, con media retribución durante los tres meses últimos.

La retribución mensual que en estos casos corresponda al empleado se liquidará de acuerdo con el promedio del último semestre.

El empleado conservará su puesto, sin goce de sueldo, hasta seis meses después de transcurridos los plazos indicados precedentemente de tres y seis meses.

En casos de accidentes del trabajo o enfermedad profesional, regirán las disposiciones de la ley 9.688 y sus decretos reglamentarios.

El derecho al cobro de salarios en caso de impedimento por enfermedades inculpables no excluye la indemnización por daño o pérdida extraordinaria que sufra el empleado durante el servicio que presta al principal y que estará a cargo de éste.

El empleado también conservará su puesto, sin goce de sueldo, cuando deba prestar servicio militar por llamamiento ordinario, movilización o convocatorias extraordinarias, hasta treinta días después de terminadas sus obligaciones militares.

Los empleados suplentes, contratados especialmente para reemplazar a los que están cumpliendo obligaciones militares, a los que se encuentran impedidos por enfermedad o con goce de vacaciones, cesarán en el momento de la reincorporación de aquellos a quienes respectivamente substituyan, sin que el empleador esté obligado a otorgarles el plazo de preaviso.

Sr. Castillo. — Pido la palabra.

Este artículo, en realidad, se refiere a los derechos que tiene el factor o empleado de comercio en los casos de interrupción de servicios por las causas que establece la ley. Pero hay involucradas una serie de disposiciones que lo hacen confuso y que van a ocasionar en la práctica muy serias dificultades.

En primer lugar, no establece con claridad cual es la enfermedad inculpable a que se refiere el proyecto. Pueden presentarse estas tres situaciones: que el empleado interrumpa el servicio por accidentes o enfermedades inculpables; que lo interrumpa por accidentes o por enfermedades adquiridas en el trabajo; que sufra la enfermedad por la culpa o el hecho directo del patrón o de un tercero. Son tres situaciones completamente distintas que el artículo las presenta en una forma confusa, que ocasionará serias dificultades en la práctica, como acabo de decirlo.

A mi juicio, debe establecerse una separación que aclare o defina bien esos conceptos. El beneficio que la ley acuerda es exclusivamente para las enfermedades o accidentes inculpables; los derechos del obrero a percibir el sueldo o retribución que durante ese tiempo le corresponde, no le priva por cierto del derecho para ejercitar la acción que le corresponda contra el patrón, cuando éste fuera el culpable de la enfermedad o para hacer valer los derechos que le acuerda la ley de accidentes del trabajo.

Naturalmente que en estos casos, cuando haya de ejercitar la acción contra el patrón, no podrá exigir a la vez el sueldo que ya ha percibido como indemnización del daño que ha sufrido. Creo que esto no es necesario decirlo

en la ley; está en el principio general del derecho.

Además, el artículo al referirse a las distintas formas de retribución, habla del sueldo, jornal, comisión u otro modo de remuneración, sea en dinero o en especie, alimento o uso de habitación.

Esta disposición puede tener aplicación en muchos casos para los obreros y muy rara vez para los empleados de comercio. O se da la habitación y el alimento como parte de la retribución que se acuerda al empleado o al obrero, y entonces no es necesario establecerlo taxativamente en la ley, o no se les acuerda como retribución sino simplemente como estímulo o ayuda extraordinaria, y entonces el establecerlo en la ley va a perjudicar al empleado o al obrero, porque lógicamente el principal que da esa especie de premio o estímulo a su empleado u obrero, y que podrá retirarlo en cualquier momento, — cuando no existan las mismas razones que lo determinaron después de la sanción de la ley —, tendrá que ajustar los sueldos o salarios del empleado o del peón, teniendo en consideración esas ventajas que antes le concedía gratuitamente.

Al acordar una protección en este sentido, se ha observado en todos los países que cuando la acción oficial se ha dejado sentir más energicamente para proteger al trabajador, la acción privada se ha restringido y la ha dejado a cargo del Estado.

Con mucha mayor razón va a ocurrir en este caso, cuando simplemente esta protección se lleva a un empleado o a un obrero, y va a recaer sobre un empleador.

Habla este artículo de comisiones. Los empleados trabajan a veces por un sueldo fijo y una comisión, en proporción de las ventas que realizan. Otras veces, trabajan exclusivamente a comisión, pero en relación de dependencia inmediata respecto del principal. En estos casos estaría bien el artículo, puesto que en realidad ésa es una retribución fijada por los servicios del empleado; pero hay otros casos en que el empleado trabaja libremente sin esa dependencia de su principal. Trabaja en esas condiciones, no sólo para una casa de comercio, sino para varias casas, especulando exclusivamente en la comisión que percibe. Ya no es dependiente de una sola casa; podríamos decir que trabaja por su cuenta a comisión.

¿Quedaría comprendido este último empleado en las previsiones de la ley?

Se refiere, también, a los casos de habitación. En las grandes empresas, como premio

de estímulo a los empleados, se les da habitación y se les hace también una serie de concesiones que no entran, por cierto, en la retribución de los servicios.

Después de la sanción de la ley, señor presidente, yo estoy seguro que todos esos empleados que recibían esos beneficios, como premio de estímulo, no gozarán más de ellos o se les computará como parte de la retribución, no porque en el momento recarguen el presupuesto del principal, sino en revisión de las obligaciones que le impone el despido.

Otra dificultad presentará ese artículo en lo relativo al tiempo desde el cual el empleado u obrero podrá hacer uso del derecho que se le acuerda.

Dice el artículo: «Si tiene una antigüedad en el servicio que no exceda de 10 años, y hasta 6 meses si tiene una antigüedad mayor».

De manera que si el empleado tiene tres meses de servicios, tendrá que retribuirle, también, cuando interrumpa el trabajo, con tres meses de sueldo, en las mismas condiciones que el que lo interrumpe cuando tiene diez años de servicios.

Esto no es equitativo, y, sobre todo, no da una base segura que esté en concordancia con otras disposiciones del mismo proyecto. Las leyes de jubilaciones y las leyes de contratos de trabajo, en general, establecen un término durante el cual no se acuerdan beneficios a los obreros; se establece el término de prueba. Se considera que durante cierto plazo el empleado u obrero no se incorpora definitivamente a la empresa y entonces, durante ese plazo, no goza de los beneficios de la ley.

Creando contribuir, si bien no a mejorar la ley — porque desgraciadamente veo que ya en esta Cámara somos muy pocos los viejos que vamos quedando —, voy a proponer un artículo que la aclara, y que he redactado en esta forma:

En caso de interrupción del servicio que prestare el empleado, o por accidente, o por enfermedad inculpable el principal le conservará su puesto por los siguientes periodos: a) Por tres meses, si tuvieran una antigüedad de más de tres meses y menos de cinco años; b) De seis meses, si la antigüedad fuera de más de cinco años.

El empleado recibirá la retribución que le corresponde, durante el primer mes y sólo la mitad en cada uno de los meses subsiguientes.

Esto responde, señor presidente, a poner estas disposiciones en concordancia con todos los contratos celebrados por las empresas con sus obreros ferroviarios, donde solamente se les

acuerda medio mes de sueldo en este caso y durante noventa días.

Este proyecto que estamos discutiendo va a traer una grave perturbación en todas esas empresas, porque los empleados, con toda justicia, van a reclamar que se aplique esta ley, si se sanciona, y las empresas la van a resistir, pues tienen un contrato anterior vigente con el cual los contrataron.

Por otra parte, la diferencia que se establece entre el primero y los subsiguientes meses está uniformemente establecida en todos los contratos de trabajo. Generalmente acuerdan la retribución íntegra durante el primer mes y media retribución durante los subsiguientes; y esto por una razón lógica: el empleado que percibe el sueldo íntegro prolongará la enfermedad por los tres meses, lo que no le será difícil, y, en cambio, cuando reciba la mitad de la retribución hará lo posible por reincorporarse a su trabajo cuanto antes.

No por eso esta disposición agravará la situación de los empleados y obreros, en la forma proyectada por la Comisión; por el contrario, los coloca en mejor situación porque los deja en libertad de reclamar en los otros casos a que me he referido de enfermedades inculpables.

Termina así mi proyecto:

Esta retribución no excluye la indemnización que se deba al empleado, cuando el accidente o la enfermedad haya sido determinada por culpa del principal o de terceros.

En caso de accidente del trabajo o enfermedad profesional, regirán para los empleados de comercio las disposiciones de la ley 9.688 y decretos reglamentarios de la misma.

Los demás son exactamente como los ha proyectado la mayoría de la Comisión, y los propongo para el caso de que sea rechazado el artículo de la Comisión.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Pido la palabra.

Hubiera sido mejor para la claridad y ordenación de este debate, haber pedido que se tratara por partes este artículo y que se discutiera en esa forma; en lo sucesivo, para los demás artículos, así lo solicito; porque en realidad, con el objeto de no alterar la enumeración y la estructura del Código, hemos involucrado — y así viene el proyecto de la Cámara de Diputados, — que no difiere casi en nada con nuestro dictamen — hemos involucrado, repito, una cantidad de materias, que si bien guardan una estrecha relación, comprenden puntos diferentes y complejos.

Así, resulta que son numerosas y complicadas las impugnaciones que acaba de formular el señor senador por Catamarca. Y voy a procurar explicar al Honorable Senado, con la mayor exactitud posible, cuáles son las razones que ha tenido la Comisión para mantener el despacho de la Cámara de Diputados, que casi no difiere del nuestro.

El artículo de la Comisión de Códigos del Senado dice: «Los accidentes y enfermedades inculpables que impidieren el ejercicio de sus funciones a los factores, dependientes, empleados y obreros».

Empiezo por advertir que la Comisión ha substituído la palabra «interrumpir», que es del proyecto de la Cámara de Diputados, para mantener la palabra «impedir» que tiene el código actual, con el objeto de concretar mejor la idea y el propósito de la ley. Es necesario determinar bien que se exige un impedimento efectivo del trabajador, impedimento o causal para no trabajar que, como es natural y legal, quedará sujeto a contradicción y prueba en contrario, porque la causa para ganar salarios sin trabajar tiene que ser existente e indudable la enfermedad inculpable.

La comprobación de una enfermedad simulada, con el propósito de no asistir al trabajo, aparte de que sería un fraude, importaría una falta injustificada que, de reiterarse o de probarse, puede autorizar el despido del obrero en las condiciones que se establecen en el artículo 160 de esta ley.

Hecha esta advertencia voy a establecer con la mayor claridad que me sea posible, cuáles son las situaciones, mejor dicho, las acciones que tiene un obrero o un empleado para reclamar sueldos por enfermedad inculpable, que es una cosa; en caso de accidente del trabajo, que es una segunda cosa, y en caso de pérdida o indemnización extraordinaria, que es una tercera cosa. Son tres acciones diferentes, por causas distintas, que no se pueden confundir.

La enfermedad inculpable es aquella común, que no depende ni está incluída, por cierto, en los accidentes del trabajo, como podría ser, una gripe, una pulmonía, etcétera, es decir, cualquier enfermedad común inculpable, que no dependa, quiere decir la ley, de una causa ocasionada ex profeso por el obrero. Por eso es que la Comisión de Códigos, — y entiendo que también el despacho de Diputados, — ha suprimido del código la palabra «imprevisito», porque nada significa. Lo que la ley necesita es que sea inculpable, que el obrero no se la haya producido u ocasionado para no tra-

bajar. Que sea imprevista, no tiene ningún significado; puede ser imprevista, y siendo culpable, la ley no lo ampara.

De manera que yo no comprendo bien, señor presidente, en qué consiste la observación del señor senador por Catamarca. Si el obrero sufre un accidente del trabajo, que está comprendido en la ley especial de la materia, el proyecto de la Comisión dice que entonces rige esa ley; no tiene nada que ver con enfermedad inculpable. Si es accidente del trabajo, tiene que ir a buscar su amparo en los beneficios que le otorga la acción extraordinaria de la ley o la acción común del Código Civil para casos de indemnización.

La tercera situación, la del daño extraordinario que menciona el Código de Comercio, también incumbe reparar a todo patrón, en caso de que le ocurra al obrero o al empleado, con ocasión del desempeño de sus tareas.

Sr. Castillo. — ¿Me permite una interrupción?

Desearía que me indicara cómo queda la tercer situación a que me he referido, al caso de enfermedad por culpa del patrón, al caso del obrero que interrumpe su trabajo por un hecho doloso, culpable del patrón o de un tercero.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Esa es una cuestión que ha sido tratada por los comentaristas del Código. Cuando se trata del daño a que están sujetos los empleados en el desempeño de sus funciones, de esta acción extraordinaria, los tratadistas discuten lo siguiente: el daño ocasionado, extraordinario — y la Comisión mantiene esta palabra, sobre lo que llamo la atención del Honorable Senado, porque fué suprimida en la Cámara de Diputados — tiene que ser un hecho de tal naturaleza que no podía haber ocurrido, si el individuo no hubiera estado en ese momento al servicio de su patrón. Esa es la característica de esa acción: se elimina lo habitual y normal; cuando se trata de un hecho emergente del desempeño de sus funciones. Si ese daño se lo ocasiona un tercero, se sostiene de acuerdo con la doctrina de la ley civil — que es subsidiaria de esta ley general —, que ese tercero debe indemnizar, pero siempre el patrón es responsable por los perjuicios, que recibió el empleado, directa o subsidiariamente; sin perjuicio también de la acción del patrón para resarcirse, contra el autor del daño.

Me parece que eso es lo que preguntaba el señor senador.

Sr. Castillo. — No está claro.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Para mí está claro. El que recibe el daño tiene la acción contra el tercero, y también contra su patrón.

Sr. Castillo. — Respecto a la indemnización yo no hago cuestión, sino que me refiero a cuál es la situación del empleado u obrero que interrumpe su trabajo durante tres meses por hechos delictuosos del patrón o de un tercero. ¿Tiene o no tiene derecho ese obrero para cobrar de su patrón la retribución mensual que le pagaba cuando estaba trabajando en la casa de negocio? Esa es la pregunta que yo hago.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Me hace el señor senador, sin querer, una confusión.

Me vuelve al caso de pago de salarios por enfermedad inculpable, que es una cosa distinta; la enfermedad inculpable produce la indemnización de sueldos para que se cure, para que tenga recursos para asistirse.

Ahora, ¿el empleado u obrero, sufre un accidente de trabajo? Va a ampararse en la ley de accidentes del trabajo. ¿Sufrir un hecho extraordinario que no está comprendido entre las enfermedades inculpables ni entre los accidentes del trabajo? Es una acción distinta.

Sr. Castillo. — Lo que yo pregunto es lo siguiente: si un obrero que ha sido víctima de un accidente e interrumpe su trabajo, puede exigir a su patrón que le siga pagando la retribución durante ese tiempo, sin perjuicio de las acciones que puedan ejercitar el patrón o el dependiente.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Un mismo hecho no puede tener más que una sola indemnización; vuelvo a repetirlo: se trata de situaciones y acciones diferentes.

La indemnización extraordinaria responde a principios generales del derecho civil, la reparación del daño de los que trabajan en común; y este artículo que estamos discutiendo, es semejante a lo que establece el artículo 1.731 del Código Civil, que dice:

Cada socio tendrá derecho a que la sociedad le reembolse las sumas que hubiese adelantado con conocimiento de ella, por las obligaciones que para los negocios sociales hubiese contraído, como también de las pérdidas que se le hubiesen causado.

Los que trabajan en sociedad, con ocasión del ejercicio de esa sociedad, de ese empleo, de ese trabajo común, sufren un daño y los que intervienen en ese negocio como socios pagan ese daño. Es un principio de derecho que no puede discutirse. He citado este artículo por-

que es uno de los más conocidos. El mismo artículo 414 del Código de Comercio, trae otro caso de indemnización entre socios que responden a la misma doctrina, y dice:

Cada uno de los socios tiene acción contra la sociedad, no sólo por las sumas que haya desembolsado en utilidad de ella, con los intereses de plaza, sino también por las obligaciones que haya contraído de buena fe, para los negocios de la sociedad.

Si sufriera alguna pérdida, o recibiere algún daño, por razón de sus actos como socio, debe ser indemnizado de todo lo que inmediata o directamente hubiese perdido, o del daño que hubiere sufrido por razón de la sociedad.

Son preceptos generales conocidos y comunes a todos los que trabajan en sociedad; se resarcen recíprocamente entre ellos de los perjuicios por el trabajo en común de la sociedad.

Bien, señor presidente, esto por lo que se refiere a la segunda parte de la impugnación del señor senador por Catamarca. Después observaba que lo relativo a sueldo, jornal común u otro, sea en dinero o en especie, alimentos o uso de habitación, no les privarán del derecho de percibir íntegramente dichas retribuciones hasta tres meses de interrupción si tienen una antigüedad en el servicio que no exceda de diez años, y hasta seis meses, si tienen una antigüedad mayor con media retribución durante los tres meses últimos.

La enumeración de este artículo tiene por objeto poder determinar en todo caso cuál es la cifra, el monto, la cantidad, mejor dicho, de indemnización que se debe dar a un obrero enfermo por cada uno de los meses que no trabaja en caso de enfermedad inculpable, como ocurrirá, — y el señor senador se encarga de confirmarlo — pues es sabido que los contratos de obreros no siempre son a sueldo fijo mensual, sino que trabajan en distinta forma. Entonces la ley ha querido decir con esta enumeración amplia que toda clase de remuneración debe estar comprendida o computada en beneficio, en caso de enfermedad, y si recibe varias clases de remuneración se deben sumar o liquidar todas para sacar el término medio que represente lo que mensualmente le corresponde en total, a efectos de la indemnización.

El código vigente dice en su artículo 155:

Los accidentes imprevistos o inculpables que impidieren el ejercicio de las funciones de los factores o dependientes, no interrumpen la adquisición del salario que les corresponde, siempre que la inhabilitación no exceda de tres meses continuos.

La mejora para los obreros y empleados que ahora se discute, consiste, como se ve, en agregar simplemente tres meses más con medio sueldo y seis meses sin sueldo, conservando el empleo: el principio es el mismo, no hemos cambiado nada.

Sr. Castillo. — ¿Me permite una interrupción? Ese artículo corresponde a una época en la cual todavía no teníamos la ley de accidentes. El artículo comprende las tres causas que ahora se separan.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Naturalmente, porque la ley de accidentes existe recién desde el año 1915.

Sr. Castillo. — De manera, entonces, que no se puede citar ese artículo como antecedente para justificar lo que se ha puesto en el despacho.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Ese artículo es exactamente igual al que mantenemos nosotros. Le quitamos los accidentes de trabajo como acaba de expresar el señor senador, porque éstos tienen ahora ley especial y debe estar comprendido en ella el empleado de comercio y el obrero.

Yo no veo ningún inconveniente en esto. Nos ha parecido justa la sanción.

La Cámara de Diputados, dice: hasta tres meses de interrupción, si tiene una antigüedad en el servicio que no exceda de diez años y hasta seis meses si tiene una antigüedad mayor de este último tiempo. La única diferencia es que nosotros ponemos medio sueldo en los últimos tres meses.

Ahora, con relación a la antigüedad que explica el señor senador por Catamarca, puede ser perjudicial para los obreros, porque en los contratos que tienen las empresas ferroviarias, por ejemplo, se fija un plazo menor de un mes, aunque no sé si hay otras formas determinadas.

No me explico bien cómo puede ser eso, por cuanto el código actual da hasta tres meses: no sé cómo las empresas por contratos privados reducen ese término, cuando los tribunales han declarado que estas concesiones son de orden público y que no se pueden quitar los beneficios que ellas acuerdan, por convenciones privadas.

No me explico tampoco cómo puede perjudicar esta ampliación del término para mantener el empleo, para que se ampare un sueldo destinado a vivir y a curarse mientras estén enfermos.

Me parece que la Comisión está en lo justo, de acuerdo con el código y de acuerdo con el proyecto de la Cámara de Diputados, en cuanto

mantiene estas disposiciones tal como están proyectadas. No recuerdo si el señor senador ha hecho alguna otra observación que necesite aclaración, pero, en tal caso, le rogaría que la repita.

Sr. Castillo. — Un empleado que trabaja en varias casas a comisión, sin subordinación, ¿en qué condiciones está?

Sr. Arancibia Rodríguez. — Como en esto no modificamos el código, esas son cuestiones de hecho que deben tener interpretación y jurisprudencia hecha. Por mi parte entiendo que si un empleado distribuye proporcionalmente entre varias casas sus ocho horas, todas deben contribuir proporcionalmente también, para pagar esos sueldos fijados en la forma y cantidad que legalmente le correspondan.

Sr. Correa. — ¿No cree el señor miembro informante que ese servicio a varios patrones excluye la idea de empleado permanente que es lo que informa el espíritu de esta ley? Pongamos el caso corriente: el contador que lleva los libros en distintas horas en pequeños comercios. ¿Es acaso un empleado de cada uno de esos comercios? ¿Y si se enferma, todos deberán contribuir a integrarle el sueldo?

Sr. Arancibia Rodríguez. — Seguramente.

Sr. Correa. — Me parece que esa no puede ser la idea de empleado de comercio que contempla la ley.

Sr. Arancibia Rodríguez. — No me explico en qué otra forma se podría hacer el pago.

Sr. Correa. — Estudiando mejor la ley y depurándola de la incongruencia que tiene. Hay artículos que, en realidad, no se entienden. Acá hay un párrafo que dice:

El derecho al cobro de salarios en caso de impedimento por enfermedades inculpables, no excluye la indemnización por daños o pérdidas extraordinarias que sufra el empleado durante el servicio que presta al principal que estará a cargo de éste.

Desde luego, que una cosa no excluye la otra, porque no tienen ninguna relación. El riesgo profesional, el riesgo ordinario de enfermedad y los daños y pérdidas que puedan sufrirse, son conceptos distintos.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Es un párrafo que está en el código vigente.

Sr. Correa. — Pero el señor miembro informante lo quiere relacionar con los impedimentos por enfermedad. ¿Ese daño que puede sufrir el empleado, es cualquier daño?

Sr. Arancibia Rodríguez. — Es el daño extraordinario, como dice el artículo.

Sr. Correa. — Yo considero que todos los daños son extraordinarios; no conozco ningún ser tan infeliz que sufra el daño en forma ordinaria y profesional.

Sr. Arancibia Rodríguez. — El que se sufre en un accidente de trabajo no tiene nada que ver con el daño extraordinario que legisla este artículo, que se denomina daño o pérdida extraordinaria y es una redacción del código vigente.

Sr. Correa. — Perfectamente, señor senador, yo he planteado el caso de si el patrón responde de todos los daños y pérdidas, ¿qué es lo que entiende el señor miembro informante por daños extraordinarios a indemnizarse por el patrón? Por ejemplo: si el empleado pierde en el almacén un billete de lotería premiado, ¿le debe indemnizar el patrón ese daño? Realmente se pueden presentar muchos casos dentro de ese enunciado tan vago del proyecto. Las buenas leyes deben emplear conceptos claros y bien definidos.

Sr. Presidente. — Se va a votar el despacho de la Comisión modificando el artículo 155 del Código de Comercio.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Se lee:

Artículo 156. — El empleado de comercio — factor, dependiente, viajante, encargado u obrero — gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual, conservando la retribución que recibe durante el servicio, liquidada de acuerdo con el artículo anterior, por los siguientes términos:

- a) Diez días, cuando la antigüedad en el servicio no excede de cinco años;
- b) Quince días, cuando siendo mayor de cinco años la antigüedad no excede de diez;
- c) Veinte días, cuando la antigüedad es mayor de diez años y no excede de veinte; y
- d) Treinta días, cuando la antigüedad en el servicio es mayor de veinte años.

Queda reservada al principal la elección de la época en que regirá el período de descanso.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Estas palabras: «viajante», «encargado», constituyen un error que la Comisión ha corregido posteriormente y por eso deben suprimirse; no están en el despacho original de la mayoría. Se ha usado las mismas palabras que emplea la ley en otros artículos, y las palabras «viajante», «encargado», no aparecen en el despacho.

Sr. Castillo. — Pido la palabra.

De manera que, en concepto de la Comisión, el viajante queda excluido de los beneficios de la ley. No es un empleado de comercio el viajante, no obstante que tiene una retribución fija, una participación en las comisiones.

Hago esta observación porque quiero que la ley pueda ser interpretada de acuerdo con la intención que se tuvo al redactarla.

Sr. Arancibia Rodríguez. — La Comisión no entiende así el caso que plantea el señor senador por Catamarca. A juicio de la Comisión, el viajante de comercio es la persona que mediante un contrato de representación comercial se compromete a colocar las mercaderías de un industrial o comerciante a nombre o a cuenta del comitente.

Sr. Castillo. — Es un representante de las casas de comercio.

Sr. Arancibia Rodríguez. — He dado una definición del viajante de comercio al señor senador. Esta definición no es mía sino de un tratadista...

Sr. Correa. — ¿De qué tratadista es señor senador?

Sr. Arancibia Rodríguez. — Esta definición la he tomado de un tratadista francés, y la tengo entre comillas aquí anotada, pero no tengo el nombre ni tiene importancia.

Sr. Correa. — Tiene importancia, porque hay que conocer las peculiaridades de cada país.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Perfectamente. El señor senador le dará valor y la apreciará según su criterio. Para mí el viajante de comercio, dentro de nuestra legislación queda definido en la forma en que acabo de hacerlo, de manera que es un empleado de comercio.

Sr. Correa. — ¿Dónde está definido el viajante en nuestra legislación?

Sr. Arancibia Rodríguez. — La legislación no define nada, y cuando define algo lo define mal, de manera que es mejor que no hablemos de definición. Lo que hace el código es determinar cuáles son las personas, cuáles son los actos que ella comprende. Esta es la ley comercial, de manera que no tiene importancia la definición.

Quiero aclarar que, a juicio de la Comisión, el viajante, que es un hombre que trabaja en estas condiciones que acabo de definir, o sueldo, comisión o cualquier otro modo de remuneración, está comprendido en los beneficios de la ley, lo mismo que el encargado.

Sr. Castillo. — Pero no están comprendidos los obreros.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Sí, señor senador; es una amplitud muy grande la que se le da a la ley, y no se la puede interpretar restringiendo o eliminando a nadie de estos beneficios. Si se ha eliminado la palabra «viajante», es en la inteligencia de que no es necesario decir «viajante»; dice «empleados y obreros».

Pero hay una cuestión que quiere insinuar el señor senador por Catamarca respecto a esta cuestión de viajeros de comercio. Se hizo en la Cámara de Diputados una exposición referente a la situación de esta clase de agentes comerciales.

El señor diputado Repetto la determinó en todos los aspectos y en la forma en que esta gente trabaja, y pidió que se le incluyera en la ley, que se les tuviera preferentemente en cuenta por ser gente que trabajaba en forma eficaz para el comercio, difundiendo las marcas y productos de las casas comerciales.

Entonces, le contestaron que se está preparando una ley especial de amparo a los viajeros de comercio; que no podía estructurarse ese proyecto dentro del Código de Comercio; y que se estaba estudiando el asunto para solucionarlo en una forma eficaz y amplia. De esa manera terminó la discusión y nadie insistió con respecto a la situación de los viajeros de comercio.

Yo creo — como digo, señor senador — que el viajante de comercio está incluido en los beneficios de la ley.

Allí se ha creído que podría estar excluido, y parece que se estudia una ley que todavía lo garante y lo coloca en mejor situación. En ningún caso, ni aquí ni allí, negamos al viajante de comercio los beneficios de la legislación comercial.

Sr. Correa. — Viajante de comercio, entre nosotros, designa un oficio, más que una relación jurídica. Hay viajeros que son empleados de comercio; las grandes casas tienen esos dependientes que envían a ofrecer sus mercaderías en las provincias. Pero hay viajeros que son comisionistas, que trabajan por cuenta propia, y el mismo nombre se aplica a los dos.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Si trabaja por cuenta propia, no tiene patrón, no tienen nada que ver con los empleados de comercio.

Sr. Correa. — El nombre de viajante es demasiado amplio, y aplicando la teoría general que expresó el señor senador, les comprenderán también, esos escotes entre los principales o mandantes, para indemnizarlos en caso de enfermedad a prorrata.

Sr. Serrey. — Ya se ha eliminado la palabra.

«viajante» y se dice «empleado de comercio». El que es empleado de comercio está protegido, y el que no lo es, no.

Sr. Arancibia Rodríguez. — El que trabaja por su cuenta no es empleado de nadie.

Sr. Presidente. — Si me permiten los señores senadores... Se ha suprimido la palabra «viajante».

Sr. Correa. — Pido, entonces, excusas al señor presidente.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho de la Comisión, modificando el artículo 156 del Código de Comercio.

—Se vota y se aprueba.

Sr. Presidente. — Se van a considerar por apartados los demás artículos, de acuerdo con la indicación del señor senador por San Luis.

—Se lee:

Artículo 157. — 1º: No estando determinado el plazo del empeño que contrajeran los factores dependientes, empleados y obreros de comercio con sus principales, puede cualquiera de las partes darlo por disuelto avisando a la otra su resolución con un mes de anticipación, si la antigüedad en el servicio no excede de cinco años, de dos meses si es mayor y no excede de diez años y de tres meses si es de más de diez años. Puede convenirse en un plazo mayor de preaviso.

Sr. Presidente. — En discusión. Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

El plazo de preaviso correrá desde el último día del mes en que se comunica la cesantía y la notificación deberá probarse por escrito.

Durante el plazo de preaviso el empleado gozará de una licencia diaria de dos horas dentro de su jornada normal de trabajo, sin que disminuya su sueldo o jornal, comisión u otro modo de remuneración; queda reservada al empleador la determinación de las horas que diariamente tendrá libres el empleado.

En caso de cesantía, sin aviso previo, el principal abonará al empleado la retribución que corresponda al plazo legal de preaviso. Este derecho no se acuerda al empleado que no tenga por lo menos tres meses de antigüedad en el servicio.

Sr. Presidente. — En discusión.

Sr. Castillo. — Pido la palabra.

Con relación al primer párrafo leído, deseo que se cambie la palabra «probarse».

Sr. Arancibia Rodríguez. — ¿Quiere el señor senador que se diga que deberá hacerse por escrito?

Sr. Castillo. — Es lo que iba a proponer, que se diga «hacerse» por escrito.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Muy bien; no hay inconveniente.

Sr. Presidente. — Se va a votar con la modificación propuesta.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

La suspensión de tareas por más de tres meses, en el período de un año, ordenada por el principal y la rebaja injustificada de la remuneración, puede ser considerada por el empleado como despido sin preaviso.

Sr. Presidente. — En discusión. Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

Corresponde la indemnización por despido sin preaviso, cuando se produzca la cesación o liquidación del negocio, que no sean determinadas por fuerza mayor; en caso de cesión o cambio de firma o cuando la precedente no haya dado el aviso previo en los plazos establecidos, pasarán a la nueva firma las obligaciones de este artículo y las de los dos anteriores. En caso de quebra los factores empleados y obreros del comercio tienen derecho a la indemnización.

Sr. Presidente. — En discusión. Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

Cuando el contrato de empleo se disuelve por voluntad del empleado, éste deberá preavisar al principal en la misma forma y plazos establecidos en este artículo y en su defecto, pagará la misma indemnización por falta de preaviso imputada para el principal.

Sr. Presidente. — En discusión.

Sr. Castillo. — Pido la palabra.

Deseo que la Comisión informe en qué forma se va a fijar esta retribución.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Según la antigüedad. Está establecido en el inciso 1º, que se acaba de aprobar.

El código mantiene el mismo principio de igualdad entre el empleado y el empleador en cuanto al despido; casi todas las leyes que yo conozco los mantienen en igualdad de condiciones, si bien algunos argumentan que el despido que da el empleado es menos grave que el que da el empleador, y algunas leyes les ponen una tasa más baja; pero contra eso se argumenta que el despido del empleado está siempre garantido, mientras que es difícil que éste pueda garantizar al empleador.

Estos son principios conocidos y que no ocasionan ningún trastorno.

Sr. Castillo. — Me refería a la indemnización que debe dar al principal.

Puede ocurrir este caso: un constructor que está construyendo un edificio para el principal...

Sr. Arancibia Rodríguez. — Me parece que la jurisprudencia ha declarado que los constructores no son comerciantes.

Sr. Castillo. — Es un ejemplo que se me ocurre en el momento.

Pongamos el caso de que sea un empleado irremplazable para la obra que está realizando el principal. Abandona al patrón y se retira. ¿Qué indemnización habrá que pagarle al principal?

Sr. Arancibia Rodríguez. — Habría que hacer el cálculo, tomar el promedio de sus ganancias, por día, por semana, por quincena, y hacer el cómputo de lo que le corresponde. Si ese empleado no tiene más que cinco años de antigüedad es un mes de sueldo.

Sr. Castillo. — Lo que ocurre es lo siguiente: que esa retribución por despido es exclusivamente a favor de los empleados. El derecho de reclamar daños y perjuicios, por la ruptura extemporánea o maliciosa corresponde a los dos contratantes.

Entonces, dentro de esas previsiones, se explica la disposición; pero establecer que se va a pagar al principal la misma retribución que el principal hubiera pagado al obrero en igualdad de condiciones, no es aceptable. Dejo constancia de esta observación, señor presidente, sin darle mayor trascendencia.

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se votan y aprueban, sin observación, los siguientes incisos:

5º Las indemnizaciones por falta de preaviso que correspondan al empleado, y las acordadas por el párrafo 5º del artículo 155, no están sujetas a moratorias, ni embargos y regirá a su respecto

lo dispuesto para salarios y sueldos en el artículo 4º de la ley 11.278; estas indemnizaciones gozarán de privilegio general sobre los bienes del comerciante fallido;

6º Serán nulas y sin ningún valor todas las convenciones que dejen sin efecto o reduzcan las obligaciones determinadas en el presente artículo y en los dos anteriores.

—Se lee:

Artículo 158. — Existiendo plazo estipulado por escrito en el contrato de empleo, las partes no pueden, arbitrariamente, separarse de su cumplimiento. La parte que lo hiciere estará obligada a indemnizar a la otra a juicio de arbitradores, los perjuicios que por ello le sobrevengan.

Para la fijación de los perjuicios se tendrán en cuenta los usos, la naturaleza de los servicios comprometidos, el tiempo transcurrido y en general todas las circunstancias que sirvan para determinar su extensión.

Sr. Castillo. — Pido la palabra.

El juicio arbitral que establece esta disposición, señor presidente, está consignado también en el código. En la práctica ha traído gravísimos inconvenientes. El juez falla declarando el derecho que reclama el empleado y ordena que los peritos arbitradores establezcan el monto y ha ocurrido muchas veces que por servicios que se podían estimar, por ejemplo en 2 ó 3.000 pesos, los peritos los han estimado en cien pesos; es decir que los peritos han revocado la sentencia del juez. Esto me parece que es un error fundamental. Los jueces, para evitar estos hechos que se repiten con mucha frecuencia, han establecido uniformemente, cuando hacen lugar a la demanda, que corresponde deferir al juramento estimatorio del perjudicado, la estimación de los perjuicios dentro de la suma que fija el juez. De este modo se evita el arbitraje que es caro y peligroso.

Yo propondría a la Comisión, — y por eso hago valer la experiencia que tengo en estos asuntos — que aceptara suprimir los peritos arbitros que a nada conducen y que por el contrario perjudican. Ya basta con la indicación que se le dá al juez para estimar la indemnización.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Son exactas y muy atendibles las objeciones que acaba de formular el señor senador por Cañamarea. Este es un artículo que la Comisión de Códigos no ha modificado; es exactamente igual al del código vigente. Pero en atención a los perjuicios que ocasiona en la práctica, que indudablemente tienen que ser como los indica el

señor senador por Catmaarea, dada su experiencia y competencia en esta materia, la Comisión acepta la supresión de las palabras «a juicio de arbitraadores».

Sr. Presidente. — Se va a votar el despacho de la Comisión con la supresión de las palabras «a juicio de arbitraadores».

—Se vota y resulta afirmativa. ✓

—Se lee:

Sólo se aplicarán a esta clase de contratos las disposiciones para el despido, como si fueran con plazo indeterminado, cuando la inclusión del término de duración no resulte justificada por la clase de servicios y los usos del comercio y aparezca el propósito de haber sido incluido con el fin de eludir obligaciones.

Puede estipularse previamente, también por escrito, un período de prueba no mayor de tres meses; durante este período la rescisión del contrato se podrá hacer en cualquier momento sin lugar a indemnización.

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

Artículo 159 — Se considera arbitraria la inobservancia del contrato entre el principal y su factor, dependiente, empleado u obrero, siempre que no se funde en injuria que haya hecho el uno a la seguridad, al honor, o a los intereses del otro o de su familia.

Esta calificación se hará prudencialmente por el juez competente, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que median entre empleadores y empleados.

También puede el empleado dar por rescindido el contrato por falta de pago o mora en la remuneración convenida y por las modificaciones introducidas sin su consentimiento en el reglamento del trabajo, en cuanto al tiempo y modo de efectuarse éste.

—Se vota y aprueba.

—Se lee:

Con respecto a los principales, son causas para que puedan rescindir el contrato con sus empleados y obreros:

- a) Los casos del artículo 154 y todo acto de fraude o abuso de confianza cometido por el empleado u obrero;
- b) La ineptitud o imposibilidad para cumplir las tareas convenidas;

c) Faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o asistencia al trabajo; la indisciplina o desobediencia reiterada a las órdenes y reglamentos de trabajo;

d) Negociación por cuenta propia o ajena, sin expreso permiso del principal.

No serán obligatorios el preaviso de rescisión ni la indemnización, cuando el contrato se declare disuelto por alguna de las causales de este artículo.

— Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Castillo. — Pido la palabra.

El artículo siguiente impone a todos los comerciantes la obligación de llevar un registro de empleados, pero hay algunos que no tienen sino uno o dos empleados, y entonces se le obliga a llevar libros que les crearán serias dificultades a ese comerciante. Las leyes más previsoras establecen esta obligación para los comercios de alguna importancia, exigiéndoles que lleven un registro cuando tienen un número mayor de veinte empleados. El criterio del Código de Comercio está de acuerdo con esta tesis. A los comerciantes minoristas no se les impone la obligación de llevar libros, como a los comerciantes al por mayor. Esos comerciantes minoristas llevan simples anotaciones en su casa de comercio, y el mismo concepto debería regir para esta ley.

La modificación consistiría simplemente en eso: «Los principales que tuvieran más de veinte empleados están obligados a llevar registro, etcétera.»

Sr. Arancibia Rodríguez. — Pido la palabra.

Este es un artículo tomado textualmente de la sanción de diputados, con la sola modificación, en beneficio de las ideas que acaba de exponer el señor senador, de que los comerciantes que llevan ya el libro que establece la ley de accidentes del trabajo y su reglamentación, no necesitan llevar otro a los efectos de esta ley, porque en aquél pueden llevar las anotaciones que esta ley exige.

Me parece que la indicación del señor senador por Catamarca, no va a aliviar en nada la situación de los comerciantes al por menor, porque ese es un libro de simples anotaciones que no les ocasiona gastos, ni necesitan técnicos para llevarlo. Pero, la gente que tiene que intervenir y saber, llegado el momento, cuánto gana un empleado, cuándo ingresó, cuándo salió, las gratificaciones que ha tenido, y demás elementos de juicio, que la justicia puede necesitar en caso de que el obrero tenga que ape-

lar a ella para hacer valer sus derechos, necesita tener toda esa información y el comerciante tiene que llevar nota de todo eso, aunque sea someramente. Es indispensable que esos antecedentes estén a disposición de los que necesiten consultarlos sobre todo en los casos de diferencias entre los empleados y patronos.

Por eso me parece que el Senado debe votar el artículo propuesto por la Comisión.

Sr. Presidente. — Se va a votar el despacho de la Comisión, pero hay que leer el artículo, porque la observación ha sido formulada antes de la lectura del mismo.

—Se lee:

Artículo 160. — Los principales están obligados a llevar un libro especial que tendrá todas sus hojas numeradas y rubricadas por el Departamento Nacional del Trabajo en la Capital y gobernaciones nacionales y por las oficinas respectivas en las provincias, en el que se hará constar el nombre de los factores, dependientes, empleados y obreros, fecha de su ingreso, salida, sueldos, salarios, comisiones, gratificaciones y otras remuneraciones que perciban, y demás datos a que se refieren los artículos 155, 156, 157 y 159 de este código.

Cuando los empleadores estén comprendidos en la obligación de llevar el libro de registro de sueldos y jornales que prescribe la reglamentación de la ley 9.688, podrán utilizarlo para cumplir también con las obligaciones expresadas precedentemente.

Terminado el contrato de empleo, el principal está obligado a entregar al obrero o empleado un certificado de trabajo indicando su naturaleza y antigüedad en el mismo.

Las acciones derivadas de la aplicación de los artículos 155 a 159 de este código, se regirán por el procedimiento establecido para las indemnizaciones por accidentes del trabajo.

Sr. Castillo. — Pido la palabra.

En el último apartado se establece que los juicios a que diera motivo la aplicación de esta ley, se tramitarán por los procedimientos establecidos por la ley de accidentes del trabajo. Esta es una ley aplicable exclusivamente para la Capital y territorios nacionales, de manera que sometemos a un procedimiento de orden local a una ley que es de fondo para todo el país. Todas las leyes que se han dictado modificando disposiciones de los códigos han establecido que se tramiten esos juicios por los procedimientos sumarios que las leyes respectivas establezcan, porque en esta forma se respecta la facultad que tienen las provincias de dictar su Código de Procedimientos. No sé si

la Comisión aceptará que en lugar de ese párrafo se pusiera...

Sr. Arancibia Rodríguez. — Me parece exacta y conveniente la indicación del señor senador.

Sr. Castillo. — ...«Las acciones derivadas de los artículos 155 a 159 de este Código, se tramitarán por los procedimientos que las leyes respectivas establezcan para los juicios sumarios.»

Sr. Presidente. — ¿La Comisión acepta?

Sr. Arancibia Rodríguez. — La Comisión acepta.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo con la modificación propuesta por el señor senador por Catamarca y aceptada por la Comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—El artículo 2º es de forma.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el despacho.

Sr. Serrey. — Hago indicación para que esta sanción y las demás que se vayan dando por el Senado en los días sucesivos, se comuniquen a la otra Cámara en la sesión en que fueren adoptadas, sin esperar la terminación de ella.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Habiendo asentimiento así se hará.

7

MODIFICACION DEL ARTICULO 855 DEL CODIGO DE COMERCIO

Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1933

Al señor presidente del Honorable Senado.

La Honorable Cámara que tengo el honor de presidir ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley en segunda revisión, sobre reformas al artículo 855 del Código de Comercio y ha tenido a bien insistir en su anterior sanción.

Dios guarde al señor presidente.

JUAN F. CAFFRATA,
David Zambrano.

Sanción del Senado

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Modifícase el artículo 855 del Código de Comercio en la siguiente forma: